Córdoba, 14 de diciembre de 2021.- Proveyendo a la presentación "CUMPLIMENTA" efectuada en el día de la fecha: téngase presente la rectificación efectuada respecto del apellido de la Sra. S. S. V. F., DNI _____. En consecuencia, procédase a tomar razón en el SAC de dicha rectificación. Proveyendo a la pretensión sustancial incoada, debe remarcarse que la acción de amparo constituye una vía excepcional en donde la lesión o amenaza que se denuncia debe resultar provocada por un acto u omisión que, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, contraría un derecho constitucional del amparista. Del análisis de la demanda no se advierte manifiestamente un actuar ilegal o arbitraria por parte de la accionada. En efecto, la cuestión que se somete a consideración del tribunal es dilucidar si la decisión de la Administración de exigir que sus empleados se vacunen o se hisopen para prestar servicios luce razonable y proporcionada al fin buscado con tal decisión. Considero que la medida, sin violentar derechos individuales o las creencias de los que no se quieren vacunar, atiende a las necesidades de todo el colectivo del personal del Poder Judicial y las personas que acuden a que se les brinde el servicio de justicia. Como toda medida o circunstancia se pueden tener distintas opiniones más o menos fundadas, pero en el sub lite tal opinabilidad se desvanece a poco que evaluemos el valor del interés social protegido que no es otro que la Salud Pública. La salud constituye uno de los derechos expresamente enumerados por nuestra Constitución para todas las personas en la Provincia (art. 19, inc.1) y "...es un bien natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social" (art. 59, 1er párrafo); indicándose en el resto del artículo las acciones y prestaciones que debe realizar el Gobierno de la Provincia de Córdoba para garantizarlo. Entre ellas, destaco que se "...incluye el control de los riesgos biológicos sociales y ambientales de todas las personas..." (art. 59, 4to. párrafo).

Vemos así que en el sub examine existe una colisión entre dos intereses, los particulares de los actores, y la Salud Pública que es lo que se invoca en el Acuerdo cuestionado. No se debe menospreciar la importancia de los intereses de los accionantes; sin embargo conocemos los estragos que en la salud de la población está provocando esta Pandemia porque los estamos sufriendo en carne propia.

Así planteado el dilema se debe determinar entonces si las acciones o decisiones adoptadas por el Poder Judicial para paliar los efectos de la pandemia son adecuadas a tal fin y las menos gravosas que se podrían haber tomado, en consideración las individualidades, en este caso de los accionantes. Sobre lo primero, o sea si esta medida en particular que se ha tomado con el personal del Poder Judicial es adecuada para aminorar los efectos de la pandemia, ni este tribunal ni los actores, están en condiciones de pronunciarse al respecto ya que ninguno tiene

la capacidad técnica necesaria para ello, resta entonces establecer si las limitaciones son las indispensables y necesarias para no afectar en demasía los intereses de los accionantes. En este último cometido nos tropezamos con el mismo escollo de falta de conocimientos técnicos.-

En síntesis, si desde un punto de vista técnico no aparece que la medida adoptada es manifiestamente inidónea para proteger tanto a los empleados como a la población en general, así como tampoco que afecte, lesione, dañe la salud de los actores, no es viable la acción de amparo, por todo ello; se resuelve rechazar *in limine* la acción de amparo intentada.

2) Archívese (art. 3, Ley n° 4915).-

Fdo: Ángel Antonio Gutiez (Presidente) Elisa Saco (Secretaria)

“C., N. D. V. y otros c/ Gobierno de la Provincia de Córdoba y otro - Amparo 4915”.